

Joaquín Estefanía

La larga marcha

Medio siglo de política (económica)
entre la historia y la memoria



Joaquín Estefanía
La larga marcha

Medio siglo de política (económica)
entre la historia y la memoria

ediciones península

© Joaquín Estefanía Moreira, 2007, 2014

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Primera edición: mayo de 2007

Primera edición en este formato: mayo de 2014

© de esta edición: Grup Editorial 62, S.L.U., 2014

Ediciones Península,
Pedro i Pons 9, 11ª Pta
08034-Barcelona
info@edicionespeninsula.com
www.edicionespeninsula.com

VÍCTOR IGUAL • fotocomposición

EGEDSA • impresión

DEPÓSITO LEGAL: B. 7.836-2014

ISBN: 978-84-9942-324-1

CAPÍTULO 1

UN RELATO DE LA LARGA MARCHA: DE LO GRIS A LO GLOBAL

LA IDEA-FUERZA: EUROPA

Hay que encontrar una idea-fuerza, el relato, un punto de vista para contextualizar lo sucedido en España en el último medio siglo de su historia. Ese relato es el de la larga marcha hacia Europa, nuestra utopía factible, en busca del tiempo perdido durante la guerra civil y la mediocridad y grisura del franquismo más fanático y sectario. Hay varias generaciones de españoles que crecieron sin ser conscientes de lo que habían perdido, de lo que habían dejado atrás. La vocación europea, que ha unido a tan diferentes élites de españoles durante tantas décadas, es la normalidad; la autarquía, el enmismamiento, la excepción. Larga excepción a punto de convertirse en norma. Y sólo a la vista de este relato europeísta es posible entender la evolución de los últimos cincuenta años y, seguramente, de los que vienen por delante, que sólo pueden ser objeto de profecías.

Casi un siglo más tarde se ha hecho realidad en toda su extensión la sentencia de Ortega y Gasset, de 1910: «España es el problema, Europa la solución» (*La pedagogía social como problema político*). Quizá sea una visión eurocéntrica para algunos de los que nos analizan y nos contemplan desde fuera (por ejemplo desde América Latina, nuestra otra pasión), pero no por ese sesgo deja de ser realidad. Un periodo muy satisfactorio a la vista de lo conseguido, a veces de manera compulsiva, en ocasiones con una lentitud exasperante, sin el ritmo reposado con el que actuó la mayor parte de los países de nuestro entorno, con procesos políticos y sociológicos en general

más equilibrados. Cuenta Ralf Dahrendorf que en julio de 1957, el político británico Harold MacMillan, ascendido al cargo de primer ministro, pronunciaba en el estadio de fútbol de Bedford un discurso que pasaría a la historia, fundamentalmente por esta afirmación: «Seamos sinceros, a la mayoría de nosotros nunca nos ha ido tan bien como ahora. Recorred el país, las grandes ciudades, los pueblos pequeños, y encontraréis un bienestar que jamás habéis visto antes, al menos en la historia de este país».¹ Medio siglo después, trasladándonos a España, también podríamos decir que «a la mayoría de nosotros nunca nos ha ido tan bien como ahora», siempre que a continuación nos preguntemos quiénes somos «la mayoría de nosotros» y si ese progreso del bienestar es irreversible.

Sigamos la estela del historiador británico Eric Hobsbawm y olvidémonos de las fronteras de las centurias naturales.² Desde un punto de vista geopolítico (y geoeconómico) el último siglo comenzó para España hace casi cinco décadas (en el año 1959) y todavía no ha terminado. Por ahora es un «siglo corto». En este periodo España ha pasado de ser una sociedad cerrada, autárquica, acomplejada, a participar de los mejores efectos de la globalización como marco de referencia del siglo XXI: una sociedad abierta que dejó atrás el subdesarrollo. A partir de la caída del muro de Berlín, en 1989, aparece una nueva categoría de países que se inserta entre los desarrollados y los que están en vías de desarrollo: son los países emergentes, que tienden a la primera división y dejan la segunda o la tercera, aprovechando los condicionantes positivos de la globalización. Uno de ellos son

1. Ralf Dahrendorf, *En busca de un nuevo orden. Una política de libertad para el siglo XXI*, Barcelona, Paidós, 2005.

2. «... el siglo XX corto, desde 1914 hasta el fin de la era soviética... el siglo XX corto, desde 1914 a 1991... ¿Cómo hay que explicar el siglo XX corto, es decir, los años transcurridos desde el estallido de la Primera Guerra Mundial hasta el hundimiento de la URSS, que, como podemos apreciar retrospectivamente, constituyen un periodo histórico coherente que acaba de concluir? Ignoramos qué ocurrirá a continuación y cómo será el tercer milenio, pero sabemos con certeza que será el siglo XX el que le habrá dado forma. Sin embargo, es indudable que en los años finales de la década de 1980 y en los primeros de la de 1990 terminó una época de la historia del mundo para comenzar otra nueva». Eric Hobsbawm, *Historia del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 1995.

las instituciones nacionales, que, a pesar de lo que hay de global, siguen siendo imprescindibles en la globalización; convertir un país pobre en un país rico no se consigue sólo transfiriéndole recursos financieros (aunque también). Ninguna suma de dinero puede acabar convirtiendo a Burkina Faso en Suiza. Las célebres libertades descritas por el premio Nobel de Economía Amartya Sen («el progreso es el proceso de ampliación de las libertades humanas») son, cada vez más, requisitos indispensables para el desarrollo. Estos requisitos van desde las libertades políticas y las oportunidades sociales hasta la existencia de una red social protectora. El historiador de la economía David Landes ha precisado las condiciones institucionales que hoy han de cumplirse para que una sociedad crezca y se desarrolle; entre esas condiciones están las libertades individuales, la confianza en las formas contractuales, los derechos de propiedad, así como la existencia de gobiernos estables y no corruptos que sean capaces de escuchar las quejas y los deseos de los ciudadanos.

España es uno de esos países que en el transcurso de poco más de una generación han pasado de emergentes a desarrollados. En unas declaraciones a la prensa, la científica y premio Nobel italiana, Rita Levi-Montalcini, decía que «pese a todo, en este siglo se han registrado revoluciones positivas... la aparición del cuarto estado y la promoción de la mujer tras varios siglos de represión». Nuestro país tiene sus propias características. Quizá el mejor ejemplo para hacer un viaje panorámico por este tiempo sea el de que en apenas dos o tres generaciones, España dejó de exportar ciudadanos al exterior para sobrevivir económica (los emigrantes) y políticamente (los exiliados) y comenzó a recibir ciudadanos de otras partes del mundo, en cantidades masivas,³ que buscan con su presencia en nuestras tierras la salvación personal y familiar, y generan riqueza para sus países de origen y para su país de acogida: el nuestro.

Los contornos de las etapas históricas de este periodo varían en función de si lo analizamos desde el punto de vista político o desde el

3. En el año 2006, el Instituto Nacional de Industria estimaba que alrededor del 8,7% de la población española, más de 3,9 millones de personas, provenía de fuera de nuestras fronteras.

económico. Si el relato que nos hubiéramos propuesto hacer fuese el primero, la frontera inicial sería el final de la Guerra Civil y la llegada de Franco al poder: año 1939. Desarrollemos de pasada este relato político de modo que nos sirva de contexto del segundo: el económico. Políticamente, lo contemporáneo se corresponde en España con tres grandes etapas: el franquismo, que duró 36 años (1939-1975); la transición desde el franquismo a la democracia, de una década (1976-1985); y la normalidad democrática (desde 1986 hasta hoy, y continúa).

Aunque lo hayamos incorporado al inconsciente por obvio, conviene subrayar en cada ocasión que sea posible que si sumamos los años de la transición a los de la democracia instalada obtenemos tres décadas de libertades, de Constitución y de economía de mercado, el periodo más largo de normalidad democrática de la historia de España. No hay pues retórica ni solemnidad impuesta al destacarlo como la mayor conquista de la contemporaneidad: de las generaciones que protagonizaron ese cambio, y también de los personajes públicos que lo facilitaron, a costa de concesiones ideológicas en ocasiones muy fuertes, independientemente de las motivaciones que cada uno de ellos tuviese.

Como veremos en el transcurso de estas páginas, no todo el largo periodo franquista fue igual, aunque todo él tuviera como rasgo estructural la ausencia de libertades y la existencia de un partido único. Hay un franquismo más ruin que el resto, si cabe: el de la década de los años cuarenta, caracterizado por la vuelta atrás de los intentos modernizadores de la Segunda República, el hambre, la escasez y la cruenta represión política sobre los vencidos que se habían quedado en el interior. Una de las etapas más negras de nuestra historia. El segundo franquismo es el de los años cincuenta, década bisagra; en 1951 se abandonan las cartillas de racionamiento; poco después, avalado por Estados Unidos, el régimen franquista ingresa en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) y la economía empieza a crecer. Ese segundo franquismo trata de homologarse internacionalmente, aprovechando las ventajas de su anticomunismo primario. El tercer franquismo, el de los años sesenta y la primera mitad de los setenta, es el del desarrollismo: España crece a

una media del 6,7% anual y la propaganda tardofranquista habla con exaltación del «milagro español». Tres etapas distintas, insisto, pero con idéntico agarrotamiento institucional, que nos alejó de las prácticas europeas que hubo a nuestro alrededor terminada la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Y con el mismo color gris de fondo. La España en blanco y negro, la España de las sotanas y los bigotitos rectos, la España del sudor y el perenne olor a potaje. El franquismo fue, sobre todo, la grisura. A mis alumnos les suelo repetir con empecinamiento que la película del franquismo no es sólo ésa, pequeñamente heroica, de unos cuantos cientos de estudiantes u obreros corriendo delante de los guardias (vestidos entonces también de gris: los «grises»), sino también la de las familias humildes acudiendo a las piscinas de las Hermandades de Trabajo, cuando llegaba el verano ardiente a Madrid: los hombres y los niños tenían que bañarse en piscinas distintas—y entrar por diferentes puertas—que las mujeres y las niñas. Sólo volvían a reunirse cuando había terminado la jornada de baño y regresaban a casa. ¿Será posible que los jóvenes de hoy entiendan esta aberración como algo más que una anécdota? A veces, los jóvenes contemporáneos no pueden ver las cosas con la misma claridad que nosotros, que nos miramos retrospectivamente.

El relato económico de este tiempo se retrasa dos décadas más: no comienza hasta 1959, 20 años después de terminada la Guerra Civil. Dos décadas perdidas para la normalidad. En esos ejercicios prehistóricos, los súbditos españoles (no tenían la categoría de ciudadanos) padecen las peores consecuencias de la guerra fratricida, que durante tres años (1936-1939) asoló nuestro país y terminó con tantas vidas y esperanzas. Hambre, racionamiento, mercado negro y estrangulamiento productivo en la economía; desde el punto de vista político, algo muy parecido al fascismo italiano, con total ausencia de libertades (los revisionistas de la historia comienzan a llamar a este experimento, irritante paradoja de paradojas, «socialdemocracia de derechas»); y en lo sociológico, un país ruralizado, una extensa emigración económica y el exilio político de la parte más formada intelectualmente: el mejor capital humano de la nación.

Así es como llegamos al año 1959. Adelantemos algo de lo que sucede entonces: la autarquía económica, ese contar con nuestras propias

fuerzas que teorizó el maoísmo en China, ha llevado a España a la parálisis económica. El país está en quiebra. La peseta, símbolo de la soberanía, no es convertible en las otras divisas internacionales, por lo que el intercambio comercial es muy difícil y está sometido al trueque y a las veleidades administrativas. Cuando una máquina se estropea, apenas hay posibilidades de sustituir las piezas si éstas son de fabricación exterior. El intervencionismo arbitrista del régimen franquista es tan asfixiante que casi nada funciona con eficacia. La mayor parte de los dirigentes de las principales empresas públicas son militares en ejercicio: se inventan el concepto de empresario-militar que, un cuarto de siglo después, se reprodujo con mucha amplitud en el Chile de Pinochet.

La secuencia que nos conviene para describir estas décadas de historia económica, hasta hoy, habla de cuatro grandes etapas: la primera, la del desarrollismo, es la que va desde 1959 a 1975, cuando muere Franco. La segunda etapa, la de la transición política (1976 a 1985), es aquella en la que se fragua la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), antecedente de la actual UE. La tercera etapa, la más corta y seguramente la menos estudiada, comprende los años del eurooptimismo (1986-1991); es el tiempo en que los españoles, que tanto han esperado para ingresar en el selecto club continental, se sienten más europeos que nadie, como manifiestan todas las encuestas; la economía y la política apuntan hacia arriba en el sismograma virtual y marchan de la mano por su estabilidad. La cuarta y última etapa es la de la normalidad (desde 1992 hasta hoy); la normalidad encierra picos de sierra, encefalogramas planos, momentos de éxtasis y de pesimismo, y mucho aburrimiento: ya no hay grandes sobresaltos. ¡Bendito aburrimiento para un país castigado por las interrupciones institucionales, muchas de ellas sangrientas!⁴

4. En junio de 2005 tuve que dar una conferencia en Cartagena de Indias (Colombia), en el seno de la Fundación Carolina. Al acabar, se inició un coloquio. Uno de los intervinientes representaba, en mi opinión, ese izquierdismo rancio que tanto daño ha hecho a las posiciones auténticamente progresistas, y no conseguía distinguir las diferentes realidades que suponen una dictadura y una democracia «formal», como él la calificó. Para él eran caras aparentemente distintas, pero realmente similares, de una misma dominación de clase. No consideraba ese «aburrimiento» como un avance de la historia.

EL DESARROLLISMO

Para que el franquismo se abriese un poco fue necesario que la economía dejara de funcionar. Se hizo de la necesidad, virtud. Valga aquel chiste que se contaba a media voz en los ambientes de los inconformistas: se debería conceder el premio Nobel de Física al Generalísimo Franco porque había conseguido lo imposible: inmovilizar al Movimiento (Nacional), nombre del partido único. A finales de los años cincuenta, el aparato productivo estaba a punto de colapsarse; era imposible renovar la maquinaria sin hacer importaciones y no había divisas para pagarlas. La peseta no era intercambiable. La balanza de pagos estaba en números rojos.

El sentido de supervivencia de los franquistas menos fanáticos (¡qué retruécano!) y la aportación técnica de un grupo de jóvenes economistas que empezaban a salir de la Universidad llevaron al Plan de Estabilización, verdadera frontera entre dos etapas. Los primeros síntomas de la necesidad del cambio se originaron en febrero de 1957, cuando Franco cambió a sus ministros y entraron en el Gabinete dos miembros del Opus Dei (que comenzaba a sustituir a la Falange como familia ideológica dominante y que entonces se presentaba como un aparente, aunque artificial, factor de modernidad en el amodorrado fascismo español: de la espada a la cruz): Alberto Ullastres, ministro de Comercio, y Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda.

El mismo año en que Franco varía la composición de su Gobierno se firma el Tratado de Roma, y se inicia la aventura del Mercado Común Europeo, con seis países: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Entre ellos hay vencedores y vencidos de la guerra mundial. Aunque se comienza la casa de la unificación por la ventana de la economía, en la mente de los padres arquitectos de la Europa unida (Schuman, Monnet, Adenauer, Spaak, Hallstein, Segni...) está la idea de que jamás vuelva a repetirse una conflagración que tenga a los europeos en bandos opuestos. La experiencia de dos guerras mundiales en el suelo de Europa parecía dar sus frutos. Pocos meses después, y con el aval de Estados Unidos—que desea tener

a España en el bando del anticomunismo, durante la guerra fría—, nuestro país ingresa en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). En 1959, la OECE daba a luz su primer informe sobre la economía española, en el que se pedía una estabilización.

El Plan de Estabilización es el primer gran documento de política económica en la España de la modernidad, de cuya filosofía se contagiarán en buena parte todos los demás. Fue publicado en julio de 1959 en la revista *Información Comercial Española*. Sus objetivos, según Ullastres, eran cuatro: «Convertibilidad, estabilización, liberalización, integración». El plan pretendía reducir la inflación, liberalizar el comercio exterior, conseguir la convertibilidad de la peseta para facilitar los intercambios y liberalizar también la actividad interna. En definitiva, lograr un mayor desarrollo aprovechando la coyuntura mundial y facilitar la integración de la economía española en la internacional, comenzando por el Mercado Común Europeo.

El Plan de Estabilización inició la transformación de una economía hacia dentro y con bastantes de los mecanismos dirigistas copiados del fascismo italiano, en una economía de mercado que intentaba homologarse a la de los países europeos, pero de la que la separaba la ausencia de libertades civiles y políticas. Sus resultados se vieron de inmediato: en el haber, la década de los años sesenta, con tasas de crecimiento anuales de alrededor del 7% en el PIB; en el debe, el olvido de la liberalización política y los elevados costes sociales, como la caída de los salarios y el aumento del paro, transformado en parte en emigración. El Plan de Estabilización era un paso necesario para que nuestro país ingresase algún día en el Mercado Común, pero no suficiente. Faltaba lo más importante y lo que se nos exigía con más denuedo: las libertades políticas. A partir de la década de los años sesenta se inicia una etapa de tres lustros en la que cada vez que el régimen franquista se acerca a Europa, ésta reverbera la misma respuesta: la España de Franco no tiene legitimidad para ser socio de la Europa democrata. En 1962, el Gobierno español manda una carta a Bruselas solicitando «la apertura de negociaciones con el objeto de examinar la posible vinculación de España a la Comunidad Económica Europea en la forma que resul-

te más conveniente para los recíprocos intereses». Gélida acogida, que se reiterará en tantas ocasiones. Sólo ocho años después, en junio de 1970, se firma el Acuerdo Preferencial entre España y la CEE; continúa el repudio político al tardofranquismo, pero se inicia una reducción escalonada de los aranceles comerciales comunes. La ampliación de la CEE a nueve miembros no variará las relaciones en lo fundamental hasta que, en los estertores del régimen, la ejecución a garrote vil del militante anarquista Puig Antich (marzo de 1974) y los fusilamientos de septiembre de 1975 (de Sánchez Bravo, García Sanz y Baena Alonso, tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, y de Txiki y Otaegui, de ETA) repugnaron tanto a la Europa comunitaria que la CEE decidió bloquear las negociaciones y no reanudarlas hasta que no se adoptara una política que respetase «los derechos del hombre, como patrimonio común de los pueblos de España». Las secuelas del franquismo, con Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno (y ya el rey Juan Carlos como jefe de Estado), no eliminaron el problema. Arias Navarro envía a su ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, a una gira por las capitales europeas; en Copenhague recibe la respuesta más contundente cuando la prensa danesa titula: «La reina recibe a un fascista».

El desarrollismo, el «milagro español» de aquellos años es importante en términos absolutos, aunque la tendencia al alza es similar (pero menor en grado) en los países de nuestro entorno. España gana 20 puntos en el PIB per cápita respecto a los países de la CEE (del 50% al 70%), pero una parte de la explicación de esa convergencia tiene que ver con lo bajo de que se partía. En la Europa de ese tiempo se viven los *años dorados del capitalismo*, el periodo durante el que más se crece y en el que, al mismo tiempo, se instala como parte central de su personalidad política el modelo social del Estado del Bienestar (*welfare state*): pensiones, educación y sanidad pública. España llegará tarde a ese modelo, ya que está fuera del club que lo inventa. Un Estado del Bienestar que es una especie de revolución pasiva del sistema: los países democráticos temen la capacidad de contagio del socialismo real y otorgan a sus ciudadanos una serie de derechos sociales de muy difícil marcha atrás.

LA TRANSICIÓN

Cuando muere el general Franco, dictador durante casi cuatro largas décadas, se inicia la transición política desde una sociedad cerrada a un régimen de libertades, homologable al de Europa, tanto en términos políticos como económicos y sociales. Esta etapa tiene dos partes diferenciadas: aquella cuyos protagonistas son Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático (UCD) y otra, a partir de 1982, cuando los socialistas ganan las elecciones por mayoría absoluta, bajo el liderazgo de Felipe González, y encauzan la situación hacia la normalidad definitiva.

La frontera es, en este caso, Suárez. Proveniente de las filas del Movimiento Nacional (es decir, del interior del franquismo), da la sorpresa que casi nadie esperaba. Cuando es designado a dedo presidente del Gobierno por el rey Juan Carlos, el semanario *Cuadernos para el Diálogo*—cauce de la oposición y de la obsesión europeísta—titula su número «El apagón», con una portada en negro que incluye una fotografía tamaño carné de Adolfo Suárez en la que, pese a su pequeñez, destacan la camisa azul y los correaes del falangismo. Los analistas se equivocaron (nos equivocamos) con una rara unanimidad, y Suárez trajo las libertades y enderezó el camino hacia Europa. Gigantesca herencia, pese a sus limitaciones. En su primer viaje continental se palpa la euforia: la democracia española, todavía frágil, apasiona. Un mes después de ganar las primeras elecciones democráticas, en julio de 1977 (con los socialistas como segundo partido), el presidente de la transición abre un maratón negociador con las Comunidades Europeas, que durará todavía ocho años más hasta la integración plena de España y de cuyo resultado él ya no será el protagonista. En ese paquete están «todas las Europas»: su ministro de Asuntos Exteriores (que luego sería comisario europeo), Marcelino Oreja, lo define del siguiente modo: «Europa son las tres instituciones, económica, defensiva y política: el Mercado Común, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Consejo de Europa».

Primero, Suárez integra a España en el Consejo de Europa, la

institución que simboliza los derechos humanos; su breve sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo (también de UCD), introduce a España en la OTAN (mayo de 1982); y el socialista Felipe González, el tercer presidente de la democracia, firmará el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea (junio de 1985). El escenario con el que se llega a este último acontecimiento, central en este relato, cambió de repente: si hasta entonces las ausentes libertades políticas habían sido la principal hipoteca para nuestra entrada, a partir de la segunda mitad de los años setenta las dificultades fueron económicas. Europa atravesaba una recesión causada por la guerra árabe-israelí del Yom Kippur y el encarecimiento del petróleo, y la economía española, aunque desequilibrada, tenía un potencial superior al de las de Portugal y Grecia, los otros dos países arrasados por dictaduras fascistas, que aspiraban a protagonizar, junto a España, la ampliación de la CEE.

Durante esta larga negociación de ocho años, España hubo de remontar, además de la crisis económica, dos escollos importantes; la enemistad del presidente francés Valéry Giscard D'Estaing, que no solamente no facilitó nuestra presencia en el club europeo sino que manifestó un comportamiento alérgico a la cooperación política y policial para acabar con el terrorismo etarra; y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que hizo emerger de nuevo el fantasma del peor militarismo español. Superados estos inconvenientes, Felipe González, al frente del primer Gobierno socialista químicamente puro de la historia de España, pudo afirmar en su discurso de investidura: «Trabajaré con tesón para allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en la CEE». Un trienio después lo había logrado.

En la madrugada del 25 de marzo de 1985, muchos ciudadanos de diversas generaciones marcadas por la dictadura y el aislamiento pudieron unirse mentalmente al brindis con el que decenas de periodistas recibieron a Fernando Morán (ministro de Asuntos Exteriores) y Manuel Marín (secretario de Estado para la CEE) en Bruselas, cantando «Asturias, patria querida» en honor del primero. El 12 de junio de ese año, el Palacio Real de Madrid, usurpado tantas veces a la legalidad, fue testigo de la solemne entrada de España en la CEE.

El sueño de la razón de tantas generaciones y de tantas sensibilidades se había hecho realidad.

En el ámbito interno, esa etapa de transición fue testigo de diversos planes de ajuste y distintos pactos sociales para sacar a nuestro país de una crisis económica muy profunda, que amenazaba con llevarse por delante la transición política. El tardofranquismo, para sobrevivir y no generar tensiones adicionales a las de naturaleza política, había retrasado el necesario ajuste económico haciéndolo más imperioso: nuestro país vivía por encima de sus posibilidades, como si la crisis energética que había asolado a todo el mundo nos resultara indiferente a pesar de ser uno de los países más dependientes de las importaciones petrolíferas. Para evitar la confluencia de las protestas políticas por la falta de libertades y de las protestas económicas de quienes exigían un mayor poder adquisitivo y eran cómplices de las primeras, el tardofranquismo cedió en estas últimas.

A mediados de 1977, la inflación estaba a punto de superar el 30%, más cercana a la realidad latinoamericana que a la europea, en la que queríamos integrarnos. Los protagonistas políticos del momento tuvieron una gran lucidez; habían interiorizado, aunque no lo hacían explícito de manera habitual, que la conjunción de una crisis política y una crisis económica fue lo que llevó a la tumba el experimento modernizador republicano de la primera parte de los años treinta. Por tanto, era prioritario que la historia no se repitiese durante la transición del franquismo a la democracia.

En el año 1977 se firmaron los Pactos de La Moncloa que, en definitiva, trataban de elaborar una política económica de sacrificios compartidos mientras se ganaba tiempo para consensuar las reglas del juego políticas en forma de una Constitución. Los Pactos de La Moncloa son el segundo gran documento de política económica de la historia moderna de España, tras el Plan de Estabilización de 1959. Y en buena medida, hay una correlación de continuidad entre ambos. Su misión fue corregir los dos grandes desequilibrios macroeconómicos de la coyuntura: la inflación y el déficit exterior. Los Pactos de La Moncloa contenían medidas de estabilización y de reforma; las primeras dieron resultados rápidos, cediendo la escala-